

Trama Política

**Boletín número 1 del mes de octubre
del 2008.**

Año 2, número 70

Contenido

Tema: Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.	Página
Una escalada hacia el terrorismo.	3
La confusión reina en la opinión pública.	6
La dimensión política de la inseguridad.	11
El problema es complejo pero tiene solución.	15
Claves del documento.	17
Notas al final del documento.	17

¿Una escalada hacia el terrorismo?

*El narcotráfico, aparentemente, ha escalado sus ataques afectando directamente a inermes e inocentes miembros de la sociedad, en medio de la fiesta conmemorativa del inicio de la Independencia Nacional, en la Plaza de Morelia, capital de Michoacán, provocando la muerte de ocho personas incluyendo algunos niños y mujeres e hiriendo a cerca de un centenar, mediante el estallido de tres artefactos de guerra, granadas de fragmentación, lanzadas en medio de la multitud que escuchaba las arengas tradicionales emitidas por el gobernador **Leonel Godoy**.*

Se han escrito centenas de páginas en la prensa y se han ocupado decenas de horas en la radio y la televisión comentando este acto infame que ha enlutado a numerosas familias michoacanas, y que ha hundido en la tristeza y generado un grave desconcierto en la opinión pública nacional porque, en efecto, se trata de un acto insólito por su barbarie, sólo comparable a los actos homicidas de otras latitudes, sobre todo los perpetrados por atacantes suicidas que afectan, de manera indiscriminada, a las infelices personas, muchas veces inocentes, que son objeto de su odio; con motivaciones raciales, étnicas o religiosas, que no existen en México.

La inseguridad en el país adquiere de esta manera otra cara, con este acto que bien puede calificarse de terrorista, atendiendo al efecto buscado de generar miedo en la sociedad civil e incrementar la desconfianza en las autoridades, responsables de garantizar una convivencia pacífica en el marco de las leyes y el castigo a los delincuentes que se atreven a romper ese orden indispensable para la vida de cada persona, de cada familia, y para la marcha de toda la sociedad en sus diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos.

La confusión provocada es enorme, buena parte por la carencia de información precisa, veraz y comprobable que debieran proporcionar las autoridades, y en otra buena dosis por las repercusiones generadas en los Medios, llenas de insinuaciones, hipótesis sin suficiente sustento, datos comunicados sin ninguna preocupación por una verificación elemental, de contradicciones, todo lo cual ha generado un amasijo del que difícilmente se puede entrever la verdad de los hechos, y sobre todo, de sus causas.

*Son numerosos los analistas que hacen notar que estos gravísimos fenómenos que atentan en forma tan severa contra la seguridad pública, no fueron generados en estos últimos años. De hecho, provienen de varias décadas atrás, cuando menos desde el sexenio de **José López Portillo**, abriéndose un largo periodo durante el cual este problema se ha venido incubando y agravando, como parte de la decadencia y la debacle del sistema político mexicano liderado por el PRI, en el cual la delincuencia organizada formaba parte del aparato del poder, como consecuencia de la corrupción sistémica que ha conformado la ligazón de sus miembros, generosamente beneficiados con los frutos de este grave e infame deterioro del aparato político.*

*No es cierto que el problema del narcotráfico entonces fuera menor que el actual, simplemente, la complicidad permitía mantener ocultas las peores expresiones de la podredumbre que ahora ha brotado como pústula a consecuencia de la decisión inédita, y en ocasiones aparentemente excesiva hasta ser calificada de imprudente, del Presidente **Felipe Calderón**, que pensó en la necesidad de combatir este flagelo como condición de gobernabilidad, en la generación de una nueva sociedad justa y pacífica en el*

Los empresarios.

Los integrantes de los Sectores Productivos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco del diálogo social iniciado en el mes de marzo de 2007 y en ocasión de la reunión plenaria celebrada el 11 de septiembre de 2008, en las instalaciones de la STPS en la Ciudad de México, hemos acordado hacer lo siguiente:

- Reiteramos nuestro respaldo a la política de seguridad pública, encabezada por el Presidente de la República, **Felipe Calderón Hinojosa**, que incluye la promoción de una cultura de la denuncia, la legalidad y la participación ciudadana.
- Estamos convencidos de que la seguridad pública de nuestro país es corresponsabilidad de todos, incluidos los tres ámbitos de gobierno, legisladores, jueces, sociedad civil, empleadores, sindicatos, universidades y medios de comunicación, entre otros actores sociales.
- Por ello, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los Sectores Productivos nos comprometemos a que en este mes de septiembre, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acordemos compromisos con acciones concretas y metas específicas.¹

El dueño del Norte, Reforma y otros.

(Fragmentos de la carta de **Alejandro Junco de la Vega**, al Gobernador de Nuevo León, **Natividad González Parás**).

“Se que te enteraste de que mi familia y yo nos hemos cambiado de residencia a Texas. Estaba en un dilema: comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a la familia a un lugar seguro.

Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron.

Perdimos fe.

Ahora que estoy en calidad de “refugiado” y se me acerca gente para preguntarme si ellos también deben hacer lo mismo... que me piden consejo o un “raid” para ir a ver casas para su familia, he pensado en lo mucho que significa perder la fe.

Te escribo para pedirte que evites que a nuestro Monterrey se le inunde su espíritu y se convierta en otra Ciudad Guerrero (Que fue inundada en el vaso de la presa Falcom).

A muchas familias les ahorrarías mucho dolor”.²

Una opinión experta.

(Entrevista con Siempre, del doctor **Edgardo Buscaglia**, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México).

El especialista en temas de seguridad nacional e internacional aseguró que México debe solicitar ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la inmediata inclusión de los autores de la masacre en la Lista de Organizaciones Terroristas Internacionales.

También insistió en que es necesario un pacto político que dé pie a la autolimpieza de las estructuras del poder público, para que se recupere la confianza de la sociedad en las instituciones.

La experiencia internacional sobre cómo operan estos grupos criminales nos dice que las personas físicas, es decir: los delincuentes, sus cúpulas y sus unidades armadas, son reemplazables.

También nos comprueba que por más esfuerzos que haga un Estado para capturar a esas personas físicas, las organizaciones delictivas tienden a crecer si no se desmantelan sus bases patrimoniales. Así pasó, por ejemplo, en Colombia y Rusia.

¿Es para causar temor?

Justamente para neutralizar al Estado y para ponerlo de rodillas. El caso de **Pablo Escobar** en Colombia es un ejemplo que simboliza esto. Cuando a Escobar se le comenzó a expulsar de los círculos sociales que frecuentaba y se empezó a aislar y a combatir a su agrupación criminal, él utilizó técnicas terroristas. Este uso de la violencia se da para amedrentar a la ciudadanía en general, a ciudadanos inocentes, con el fin de demostrarles que el Estado es impotente ante los grupos criminales.

Si uno desea dismantlar a una empresa, a una persona jurídica, no es suficiente con detener y sentenciar a un individuo, a una persona física. Esas personas, como dije al principio, son reemplazables. Hay que dismantlar las bases patrimoniales nacionales y foráneas.

Pero también (debemos recurrir a) Inteligencia Militar, que es la única rama de inteligencia que funciona adecuadamente en México, puede llegar a identificar esas estructuras patrimoniales internas de las organizaciones criminales y, con cooperación internacional, las que se encuentran fuera del territorio mexicano, para poder dismantlar a ese monstruo, al que ya se le denomina “delincuencia organizada transnacional”.

¿Podríamos descartar que se trate de una guerrilla, por ejemplo el Ejército Popular Revolucionario?

Hay que dejar que la investigación siga su curso. Sin embargo, hay algunos aspectos que son interesantes de señalar: los Zetas han estado enviando correos electrónicos con amenazas a personas prominentes de los estados, por ejemplo de Durango y Zacatecas, avisándoles que no asistan a reuniones o a determinados lugares, porque los van a “levantar”.

Sobre ese acto específico del 15 de septiembre, no. Respecto a otras celebraciones, sí. Desde junio se habían estado enviando correos electrónicos. Estas son tácticas terroristas que se

utilizan en muchos países. Colombia, Rusia, Líbano y Perú han vivido eso. Pero es evitable.

Hay salidas para contrarrestar y prevenir que esto vuelva a ocurrir. El Estado tiene que aplicar los cuatro ejes importantes: 1) lucha contra la delincuencia organizada internacional: Ir contra la persona física o jurídica, como lo está haciendo el gobierno de **Felipe Calderón**; 2) Atacar la corrupción, es decir: cualquier vínculo que se determine entre funcionarios públicos y grupos criminales; 3) Dismantlar, como ya dije, sus bases patrimoniales en todos los estados, a través de unidades de inteligencia financiera en red con unidades de investigación patrimonial, y 4) Prevenir, que significa atacar los factores de riesgo, como la pobreza asociada con adicciones, falta de empleo y disfuncionalidad escolar, entre otros, que hacen que los jóvenes se incorporen a las organizaciones delictivas. Para esto último, la Secretaría de Desarrollo Social debe estar coordinada, operativamente, con las policías, los fiscales y los órganos de inteligencia.

Para estas cosas se necesita un acuerdo político entre los gobernadores y el poder Ejecutivo. Hay que instalar las unidades de investigación patrimonial y llegar a donde se tenga que llegar. No se olvide que se trata de empresas criminales que actúan por motivos de lucro y que no se dedican solamente al tráfico de droga. Por afán de ganar más dinero y de controlar mercados y territorios, abarcan diferentes tipos de bienes y servicios ilegales: trata y tráfico de seres humanos, secuestros, contrabando, extorsiones, piratería, etcétera.

Por lo tanto, tienen una base patrimonial enorme. Y ésta debe ser (motivo de) una colaboración también internacional, puesto que los grupos criminales mexicanos han estado operando en 47 países. Tienen conexiones en África y han estado presentes, operativamente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Han atentado, por ejemplo, contra la vida de la jefa de la policía de Nicaragua, e intentaron penetrar la campaña de la presidenta de Argentina.

En la medida en que la sociedad no confía en las autoridades porque existe una percepción, justificada o no, de corrupción, ahí hay un problema que limita la capacidad del Estado para perseguir a estos asesinos. Por lo tanto, es importantísimo que los gobiernos federales y de los estados demuestren con hechos que no solamente están dispuestos a perseguir a estos asesinos y pistoleros, sino que también están listos para limpiar sus propias estructuras y generar una mayor confianza pública.

Quienes están, por ejemplo, lavando dinero para las organizaciones criminales, de alguna forma están colaborando en el lanzamiento de granadas que asesinan a ciudadanos. Así que no se tiene que considerar que lavar dinero es un delito menor.

Ellos quieren demostrar, para poder ejercer control sobre las regiones que tienen en disputa, que son la autoridad de facto, que son los que mandan y determinan las reglas del juego. Todos los actos terroristas tienden a perseguir ese objetivo. El asesinar ciudadanos inocentes es el medio, no el fin. El fin es poner al Estado de rodillas y ellos tomar el control de la autoridad de facto.

Por ejemplo, el simple hecho de que se vea que los gobernadores, sin importar de qué partido, establezcan unidades de investigación patrimonial y se comience a dismantelar esas vastas empresas mineras, agropecuarias, etcétera, que están ligadas a estos asesinos, y se extinga el dominio a esas propiedades adquiridas con bienes de origen dudoso o criminal, será un factor que a la ciudadanía le va a demostrar que

La confusión reina en la opinión pública.

La preocupación de la sociedad ante el grave problema de la inseguridad ha generado algunas reacciones de los sectores organizados, como los empresarios, y dio lugar a la convocatoria de otra nueva marcha que, por sus dimensiones, fue sólo comparable con la anterior del 2004, las dos mayores que ha habido en la historia de México, pero desafortunadamente, estas acciones no han tenido un seguimiento con la persistencia y la eficacia que podría derivarse de ellas, para lograr un impacto suficientemente importante en las autoridades.

*Desgraciadamente, el conocimiento de algunos hechos como el estallido de las granadas de fragmentación en Morelia, Mich., o el asesinato del joven **Fernando Martí**, como culminación de su secuestro; o la*

las reglas del juego han cambiado. México sale de esto, seguro. Pero el problema es que sea temprano y no tarde.³

Comentarios del periodista Carlos Ramírez.

La tarea de **Calderón** es la de construir nuevos acuerdos políticos y crear una nueva base social ajena a los compromisos que limiten la acción del Estado. Los grados de violencia del crimen organizado tratan de obligar al Estado a revalidar los pactos que existían con el régimen priísta. La ofensiva del Presidente **Calderón**, con todo y su desorden y limitaciones, dejó el mensaje claro de que no pactaría con las mafias. Los decomisos, aprehensiones y ataques contra el crimen organizado por parte del gobierno de **Calderón** fijaron el criterio de negarse a negociaciones.

Ahora lo que falta es un nuevo pacto social y político. Y ahí no tiene que haber mezquindades: el PRD y los lópez-obradoristas han contribuido, con su rebeldía contra las instituciones, a debilitar la autoridad del Estado. En la transición, un punto clave es determinante para fijar las nuevas coordenadas de las instituciones: el acuerdo por el Estado de derecho.

El gobierno federal no podrá operar con fuerza en el Distrito Federal mientras **Marcelo Ebrard** siga regatándole al Presidente de la República la institucionalidad que le dieron las mismas elecciones en el DF y las mismas instituciones electorales. Pero **Ebrard** está metido en una campaña para introducir la revocación del mandato a nivel presidencial para aplicárselo a **Calderón**, una variante del derrocamiento presidencial.⁴

desaparición de la joven **Silvia Vargas**, desde hace más de un año, han generado verdaderos sacudimientos mediáticos que a la vuelta de una semana, o si mucho nos apuran, de un mes, han quedado olvidados sin que la alarma social haya logrado algún efecto plausible que coadyuve verdaderamente a la solución del problema.

Hacen falta liderazgos sociales de suficiente envergadura porque hasta ahora ha privado la enervación, que provoca la digestión de noticias cada vez más escandalosas y repugnantes, cuyo efecto se pierde cada día, con el escándalo pasajero de las noticias de la mañana siguiente.

Un dato especialmente ominoso es la defección creciente de los Medios de comunicación, sobre todo de los reporteros que cada día se atreven menos a investigar y revelar la verdad de los hechos, y sobre todo, de sus causas y de sus autores, porque ya no sienten, a pesar de su influencia con la sociedad, que las autoridades les puedan proporcionar la seguridad que les permitiría ejercer plenamente su importante profesión.

Como una verdadera provocación y advertencia intimidatoria para todo el gremio, el conocido e influyente locutor tabasqueño, **Alejandro Xenón Fonseca**, (el padrino **Fonseca**) quien se atrevió a plantear una campaña en contra de los narcotraficantes, fue asesinado impunemente, ante impotentes testigos, interrumpiendo así la colocación de mantas que el periodista estaba llevando a cabo en la vía pública, como parte de sus exhortaciones a la ciudadanía para que no se dejara vencer por el miedo.

Escandalosa también resulta la expatriación del dueño de algunos de los principales diarios del país (El Norte, El Reforma, y otros) quien mediante carta abierta al señor gobernador de su Estado natal, Nuevo León, acepta que se ha ido porque teme por su vida y la de su familia.

Paradójicamente, en otra cara de la moneda, quizás por las mismas motivaciones del miedo, pero disfrazado, sazonado con el interés enfermizo de acrecentar su atractivo rayando en el amarillismo, algunos Medios se hacen eco de las campañas de los narcotraficantes, propalando sus burdos mensajes e ilustrando con profusión sus crueles y enfermizas torturas que culminan en crímenes, mismas que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, van mucho más allá de la voluntad de eliminar a un enemigo, convirtiéndose en verdaderos asesinatos rituales, envueltos en prácticas esotéricas y satánicas, en medio del paroxismo provocado por las drogas que les llevan a excesos inimaginables.

Para lograr una percepción veraz pero serena de esta ignominiosa realidad, que pueda dar lugar a acciones concertadas de la sociedad para combatir el flagelo del narcotráfico, se requiere de la conformación de una opinión pública con comunicaciones transparentes, claras, ponderadas, con la contundencia que prestan los hechos bien descritos y valorados; es decir, se requiere de una verdadera campaña de comunicación que dé a conocer cuáles son los objetivos de esta lucha, *que debieran ser pocos y mensurables*, con una eficacia que pueda ser confirmada en el corto plazo para permitir su continuidad en el mediano y en el largo, mediante la difusión de resultados contundentes que permitan reconstruir y consolidar la confianza que se ha venido deteriorando en medio de esta confusión, y que sea fruto del abatimiento, verificable, de la corrupción que ha dado origen a este gigantesco problema y de la impunidad que le acompaña.

Existen los antecedentes exitosos en Colombia, en Sicilia, en la Isla de Manhattan y en otros lugares. Es posible abatir la delincuencia y fortalecer la gobernabilidad pero, para lograrlo, se deben adoptar los medios y nuevas fórmulas. Si seguimos haciendo lo mismo, con los actores ya conocidos por su ineficacia, no alcanzaremos sino los mismos resultados, por lo demás bastante decepcionantes.

El narcotráfico incrementa su acción terrorista.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), **Eduardo Medina Mora Icaza**, ofreció una recompensa de hasta diez millones de pesos a quien aporte información que coadyuve a identificar y localizar a los autores intelectuales y materiales de los hechos ocurridos en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre.

En conferencia de prensa, el procurador general de la República indicó que las personas podrán proporcionar datos al teléfono 55 53 46 15 44 o bien al correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx

Señaló que la identidad de quien aporte información se mantendrá en reserva y, por lo tanto, la PGR espera la participación activa de la ciudadanía.

El funcionario agregó que, debido a los acontecimientos ocurridos en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, se abrió la averiguación previa PGR/MICH/M-I/637/2008, “por los delitos de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y los que resulten”.

“Esperamos la colaboración valiente y decidida que ayude a identificar los hechos, pues el gobierno está comprometido con la seguridad y confianza de los ciudadanos”, puntualizó.⁵

Un caso de los Medios, en Colombia.

El 17 de diciembre de 1986, un comando de sicarios, a las órdenes del narcotraficante **Pablo Escobar**, asesinó en Bogotá al director del diario El Espectador, **Guillermo Cano Isaza**.

No fue la única represalia del crimen organizado contra el emblemático periódico colombiano, que se había distinguido por su actitud firme ante el narcotráfico, su buen periodismo y su independencia. Casi tres años después del homicidio de su director, un coche bomba con

135 kilos de dinamita destruyó buena parte de sus instalaciones.

En 1997, después de un periodo de crisis, la familia **Cano** vendió la mayoría de sus acciones. En 2000, el rotativo se volvió semanario.

El 11 de mayo pasado, El Espectador volvió a publicarse como diario matutino. Su actual director, **Fidel Cano Correa**, bisnieto del fundador del periódico y sobrino de **Guillermo Cano**, tiene como objetivo que “cada edición esté a la altura de lo que hicieron tantas personas que convirtieron al diario en una institución”, como comentó a la revista Cambio el año pasado, en ocasión de su 120 aniversario.

El ex editor político del diario El Tiempo no tiene duda de que la función del periodista es siempre informar, incluso en periodos convulsos.

El vicepresidente (**Francisco**) **Santos** decía hace un par de años que no podríamos ser caja de resonancia del terrorismo. Yo, digamos, estoy en la mitad de eso: creo en el derecho a informar, porque ocultarle actos terroristas al público no sirve para nada, pero evidentemente tiene que haber una reflexión interna en cada medio sobre cuál es el desarrollo periodístico que le da uno a este tipo de actos terroristas, para no hacerles el juego, porque ellos lo que buscan es aterrorizar y generar un temor entre la población.

Claro que nosotros estamos del lado de las instituciones, pero no hasta el punto de no cumplir nuestra labor informativa y de ocultar los defectos y los errores en los que pueda estar cayendo la fuerza pública.

Obviamente hay que tener una labor permanente de investigación, mirar qué es lo que hay en el fondo de estas bandas criminales, qué es lo que les permite tener éxito en acciones de todo tipo. Y ahí uno se da cuenta de que la capacidad de penetración en las fuerzas de seguridad o en la economía legal es muy grande.

Sí. Creo que hay que ser sumamente críticos y descreídos de las fuentes oficiales en todo momento. Porque la capacidad que tiene el

crimen, como el narcotráfico, de penetrar, es muy grande. Hemos visto en Colombia hasta dónde lo han hecho. Muchas veces eso es lo que les facilita a los criminales hacer sus acciones: que están penetrando en las mismas fuerzas de seguridad y por eso no son atacados.

Obviamente se cometieron muchos errores. Algunas veces de magnificar a los criminales. Muchas veces recuerdo que los comunicados de los criminales aparecían en primeras páginas. Digamos que se les dio demasiada visibilidad por encima de la gente más noble del país.

El periodismo es casi como una misión, es un deber social. La sociedad nos pone un deber a los periodistas, que debemos cumplir por encima de cualquier otra consideración.

Recuerdo que en algún momento las escenas de terrorismo se publicaban en blanco y negro y nadie le daba color.... Hasta que alguien rompió el pacto. Y muchas veces sucedió lo mismo. Entonces esto es más cosa de la conciencia de un buen editor y una sala de redacción, comprometidos con una cierta responsabilidad frente al país. Creo que esto es algo que debe ser individual de cada medio.⁶

La opinión pública.

Cuando 67% de los ciudadanos tiene miedo de asistir a lugares públicos porque cree que puede ser víctima de un atentado terrorista, si por lo menos cuatro de cada diez están convencidos de que la ola de violencia en la que viven es resultado de la ineptitud de quienes los gobiernan, cuando es el Ejército quien directamente está encargado de la seguridad en las calles y aún así 83% está convencido de que en cualquier momento se pueden repetir actos terroristas como los del 15 de septiembre, quizá ha llegado el momento de hacer a un lado amistades y compadrazgos, y empezar a buscar encargados de despacho que tengan la más mínima experiencia en materia de información, seguridad, delincuencia y crimen organizado, experiencia de la que a todas luces carecen quienes ahora ocupan dichos cargos.⁷

La visión de la izquierda a través de un comunicado del EPR.

Por enésima ocasión insistimos en que la violencia incontenible que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios se ha venido impulsando de manera dogmática, cuya aplicación a pesar de los criminales costos contra la población es exigencia de los poderes transnacionales, aplicada de manera solícita por los gobiernos priístas y panistas.

Violencia que también refleja el alto grado de descomposición que vive la sociedad, entre ella está la de las instituciones que están podridas por la corrupción e impunidad que se alimenta por la falta de legitimidad del gobierno calderonista.

Los responsables de la violencia desbordada han sido siempre los gobernantes en turno y los políticos que con sus actos convalidan las políticas que ahondan la iniquidad social, haciendo cada vez más ancha la brecha entre los que amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable. Los priístas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social.

Los Medios de comunicación, afines al régimen, a través de comentaristas y analistas, han jugado un papel activo en la justificación de las medidas fascistas, manipulando mezquinamente los sentimientos de una parte de la población a la vez que van armando expedientes incriminatorios contra luchadores sociales que serán usados como expediente judicial para condenarlos a prisión por décadas. Tendencia “criminalizadora” que hoy lanzan contra AMLO y quienes nos oponemos a la privatización de PEMEX.

La esquizofrenia gubernamental se hace presente una vez más cuando se llama a la “unidad de todos los mexicanos sin excepción” tratando de ocultar una verdad conocida por todos los mexicanos: el país está dividido desde hace mucho entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos, aunque a unos y a otros

hoy se les nombre con postmodernismos que aterciopelan la división de la sociedad en clases sociales que engendra la lucha de clases. El Estado mexicano, las instituciones que lo componen sólo son el instrumento de la oligarquía para oprimir y garantizar la explotación a favor de un puñado de familias oligarcas que se apropian de la riqueza social del país.

El PRI, que a través de sus personeros dice que cuando gobernaba no había tanta violencia. ¿Cómo iba a haber violencia desbordada, si la delincuencia organizada se encontraba en santa comunión con los gobiernos y priístas personificados en la actualidad por **Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes Linares, Emilio Chuayffet, los Hank Rhon, Enrique Yakson** que por cierto ¿Ya estará en una clínica de desintoxicación?, beneficiarios son también los grandes monopolios capitalistas.

Es de agradecer a la mayoría de analistas políticos, medios electrónicos y escritos que no dudaron en deslindar inmediatamente a nuestro PDPR-EPR o cualquier fuerza insurgente. Pero, consideramos que hace falta que retomen los motivos por los cuales nos vimos en la necesidad de accionar militarmente en julio y septiembre del año pasado, como autodefensa: la desaparición forzada por un año y cuatro meses ya, de nuestros compañeros **Edmundo Reyes Amaya** y **Gabriel Alberto Cruz Sánchez**.⁸

Un problema de dimensiones globales.

El presidente **Felipe Calderón** afirmó que el mundo enfrenta desafíos comunes que demandan la corresponsabilidad de todas las naciones, y que México y América Latina son un buen ejemplo de los retos de seguridad, porque son de las regiones del mundo con mayor número de muertes violentas, lo cual limita su desarrollo.

Dijo que en México se enfrenta a la delincuencia y al crimen organizado que atentan contra “nuestra sociedad y nuestras instituciones democráticas”. Pero destacó que “este combate

frontal requiere corresponsabilidad internacional”.

Cualquier acto de terrorismo y cualesquiera que sean sus explicaciones o motivaciones ideológicas, no pueden ni deben tener cabida en la comunidad de valores que con tanta dificultad hemos forjado.

“Las amenazas a la seguridad global provienen no sólo de conflictos entre Estados, sino de los desafíos que plantean las actividades de actores no estatales, como son las organizaciones criminales, dedicadas al terrorismo o al narcotráfico”.

También refrendó la voluntad de México para que, con base en el derecho internacional, se prevengan actos terroristas y se sancione a sus autores.

“La paradoja es que todos estos problemas sólo se pueden enfrentar y resolver con acciones globales, que exigen, por tanto, la intermediación de las Naciones Unidas”, sostuvo. El presidente **Calderón** también se pronunció por una visión integral de la migración, para que sea legal, segura y respetuosa de los derechos humanos, y recordó que entre los 200 millones de personas que viven fuera de su país están millones de mexicanos en Estados Unidos, que salieron en busca de vida digna.

“La migración no puede reducirse al tema de la seguridad o a su gestión como un fenómeno económico”, dijo después de referirse a los cuestionamientos a los principios de las Naciones Unidas.⁹

Los cuerpos de policía de élite fuera de control.

Los AFIs marcharon desde la sede de su corporación, en Cuatro Caminos, hasta el edificio central de la PGR, ubicado en Paseo de la Reforma, luego de que por la mañana un grupo de policías federales desplazara a los agentes de investigadores que estaban encargados del resguardo de la entrada principal de la Agencia.

“A nosotros nos hicieron a un lado; por eso, la protesta. No tenemos respeto laboral”, indicó un oficial.

Algunas leyendas que escribieron en las cartulinas que portaron en la marcha decían: “El enemigo está en casa. Vete **Genaro**”, “Basta de

abusos. Exigimos un titular de PGR para AFI, Fuera mandos corruptos de PF en AFI”, “Fuera **Genaro**, favorece a los delincuentes” y “Ya amenazaron con corrernos a todos los AFI. **Cárdenas Palomino**, sal y amenázanos delante de los medios como lo haces siempre”.¹⁰

La dimensión política de la inseguridad.

*Es bien conocida la sentencia de **Jaime Balmes** que, en una cita bastante libre, nos recordaría que todos los hechos políticos tienen una causa y una explicación, aún cuando, en ocasiones, nos cueste trabajo descubrirla. La pregunta clave es ¿A quién benefician? Esta interrogante ha sido usada y abusada, de tal manera que algunos planteamientos ideologizados se atreven a especulaciones fantasiosas, torcidas hasta el ridículo. Así, hay quien se ha atrevido a decir que esta violencia podría provenir de la “extrema derecha”, sin concretar nada al respecto, ni justificar siquiera la existencia, en México, de un fantasma con tal nombre.*

Sin embargo, lo que si podemos hacer notar sin necesidad de forzar nada, es la coincidencia de los grupos autodenominados de “izquierda”, y quizás con mayor precisión de lo que pudiera llamarse la “extrema izquierda”, con ciertas expresiones de la inseguridad que padecemos adobadas con algunas formas de subversión y terrorismo, que en algunas proclamas son calificadas de “revolucionarias”.

Todas ellas, de alguna manera, convergen en un objetivo tácito o explícito: estorbar el funcionamiento del gobierno, incrementar el desorden social abriendo perspectivas a una situación por demás peligrosa de ingobernabilidad, desprestigiar a las instituciones; especialmente a las autoridades abocadas a la preservación de la seguridad, así como a la administración e impartición de la justicia; hasta llegar a los extremos, por un lado, de la burla, el reto y el desafío a las autoridades mediante una violencia inaudita, mensajes, y hasta provocativas mantas; y por el otro, agresivas y violentas manifestaciones callejeras para impedir la reforma de PEMEX, exhortar al desconocimiento de las autoridades e instituciones, el repudio de la Alianza para la Educación; pasando por el extremo de solicitar la defenestración del Presidente, _ desde luego, con una hipocresía medida: “constitucionalmente” _ hasta llegar a las proclamas de grupos subversivos como el EPR y organizaciones afines.

A los señalamientos anteriores la izquierda protesta indignada porque se está tratando, según ellos, de incriminar a la legítima protesta social y política.

No deja de ser cuando menos curioso que la izquierda en un muy amplio espectro de sus expresiones políticas, se ha abstenido de atacar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Se monta sobre el problema para atacar al gobierno incrementando la confusión, haciendo énfasis en verdades a medias como el señalamiento de la problemática económica de gran parte del pueblo, y su marginación, como si fueran prácticamente las únicas causas eficientes de la violencia, lo cual es tan injusto como acusar a todos los pobres de bandidos, actuales o en potencia.

Ciertamente, muchos sirven a las mafias obligados por el miedo, incluyendo desde luego a muchos jóvenes con familias desechas, muchos campesinos sin crédito y carentes de otros medios para hacer producir el campo, muchos pescadores cooptados para cambiar sus redes y anzuelos por implementos convertibles en plata y oro, pero también son cooptados muchos educados y bien capacitados que ponen sus conocimientos al servicio de las mafias para traficar con los estupefacientes, lavar dinero, montar laboratorios sofisticados o perfeccionar innumerables modos de transporte y ocultamiento de las drogas y

del dinero que producen; de tal manera que el arma principal de los mafiosos es la compra de las personas, el chantaje y el terror que se traducen en continuos escarmientos para todos aquellos que de alguna forma se oponen a sus operaciones; incluyendo, de manera significativa, a un número creciente de autoridades municipales, estatales y federales, pasando por policías, soldados, agentes del ministerio público y jueces. De tal manera que insistir en que el modelo económico y la falta de desarrollo serían las causas prácticamente determinantes de esta enorme corrupción, no es sino un expediente cargado de demagogia, nacido de planteamientos fuertemente ideologizados que no resisten ningún análisis.

Las denuncias ciudadanas comienzan a operar.

(El señalamiento de los presuntos responsables ha sido objeto de numerosos comentarios, entre ellos, el de que han sido denunciados y entregados por la mafia competidora, “la familia michoacana”).

Sin pagar la recompensa de 10 millones de pesos que ofreció el gobierno federal, la Procuraduría General de la República capturó a tres presuntos zetas, que, según las autoridades, confesaron ser los autores materiales de los atentados terroristas perpetrados la noche del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.

Una denuncia anónima alertó a personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada sobre la ubicación, en un domicilio de Apatzingán, de los supuestos integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, que fueron aprehendidos, el pasado 25 de septiembre, informó la PGR.

Los sospechosos están identificados como Juan **Carlos Castro Galeana**, El Grande, quien lanzó la granada en la plaza; **Julio César Mondragón Mendoza**, El Tierra Caliente, quien arrojó otra granada calles adelante, y **Alfredo Rosas Elicea**, El Socio o El Valiente, quienes son interrogados sobre el móvil del atentado, así como la identidad de los autores intelectuales que financiaron la agresión.¹¹

Los servicios de “inteligencia” del país.

Para 2009, el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) tiene planes ambiciosos que buscan transformarlo en una institución capaz de atender la agenda nacional de riesgos; sin

embargo, la fracción priísta en el Senado presentará una iniciativa para desaparecerlo.

En reunión en San Lázaro, el directos del Cisen, **Guillermo Valdés**, solicitó un aumento de 90% al presupuesto del organismo con el fin de que el año próximo le asignen 2 mil 439 millones de pesos.

En este contexto, el PRI en el Senado de la República propuso al presidente **Felipe Calderón** desaparecer al Cisen para crear un organismo con autonomía técnica y de gestión, similar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La propuesta para crear dicho órgano será presentada en los próximos días por el PRI.¹²
La corrupción al interior de las policías.

Los exámenes de control de confianza para ingresar a la Policía Federal o a la AFI no son garantía de limpieza en las corporaciones, pues algunos elementos han sido aceptados pese a que reprobaron y otros fueron admitidos sin hacer las pruebas.

En 2007, de acuerdo con una denuncia investigada por la Visitaduría General de la PGR, se cometieron irregularidades en los exámenes de detección de drogas y se aceptó a agentes que dieron positivo.

En 2006, funcionarios del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano de la PGR amagaron con renunciar porque pretendieron obligarlos a firmar 962 evaluaciones de agentes federales de investigación sobre los que no tenían certeza de los resultados de sus evaluaciones.

Incluso en diciembre de ese año, 839 elementos de la AFI fueron transferidos a la Policía Federal

sin el control de confianza, como exige el reglamento para integrar el Servicio Civil de Carrera.

Entre ellos figura la subinspectora **Lorena González Hernández**, actualmente detenida por su presunta complicidad en el secuestro y asesinato del menor **Fernando Martí**.

También es el caso de la agente **Sonia Virginia Bastida Morales**, alias “La Comandante”, detenida en Monterrey junto con dos cómplices, sospechosa de participar en el secuestro del cuñado del Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, **Aldo Fasci**, en abril pasado. Fuentes de la PGR señalaron que los exámenes también suelen ser utilizados para despedir a los elementos que ya no quieren en la corporación.¹³

La contaminación de los partidos políticos.

La mayoría de los partidos políticos apoya la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que investigue a los aspirantes a puestos de elección popular y, de esta manera, evitar infiltraciones del narcotráfico.

La medida, que aplicaría a partir de los comicios de 2009, es aceptada por PRI, PRD, PVEM y el Partido Social Demócrata (PSD) _principal promotor_, con la reserva de que el Instituto Federal Electoral (IFE) regule la participación del Cisen y a la vez promueva el antidopaje, la revisión de cuentas bancarias y auditorías internas a los aspirantes.

El presidente del PRD, **Guadalupe Acosta Naranjo** dijo: “El IFE debe ser el que haga la investigación y apoyarse con otras instituciones, sea el Cisen o la PGR, pero no deben ser las instancias gubernamentales las que lleven la supervisión, porque serían juez y parte”, aclaró. “Deberíamos tener un compromiso los partidos para cerrar filas, ya que si hay alguien rechazado por dudosa reputación, debe haber un pacto para que nadie lo acepte”.

Acosta Naranjo subrayó que además de experiencia, en este trabajo se necesita valor para señalar nexos con el narco.¹⁴

Cada día son más frecuentes las víctimas inocentes de la sociedad

La sociedad civil se convirtió en los últimos meses en víctima recurrente, y en ocasiones en blanco de la violencia generada por los enfrentamientos entre cárteles de la droga, así como por los operativos conjuntos del Ejército mexicano y cuerpos policíacos contra el crimen organizado.

Producto de estos choques, los ciudadanos han sido testigos fortuitos de persecuciones y tiroteos a cualquier hora del día. Además, confusiones y balas perdidas también cobraron la vida de, al menos, 152 personas inocentes este año.

Un recuento de El Universal, a partir del número de bajas por el crimen organizado en 2008_ que hasta el 28 de septiembre alcanzó 3 mil 391_ revela que las acciones contra ciudadanos y los hechos indirectos de violencia que atemorizan a la población se incrementaron en los últimos meses.

El 5 de julio, con motivo del homicidio 2 mil en el año, este diario informó que la narcoguerra había arrancado la vida a 39 niños, principalmente en Sinaloa, con 15; otros nueve en Baja California, y cuatro en Zacatecas.

El 28 de agosto, días antes de la marcha contra la inseguridad, se reportó el descubrimiento de 12 cuerpos decapitados en Yucatán.

El hecho que desató mayor consternación fue el atentado en el centro de Morelia, Michoacán, donde hasta el momento perdieron la vida ocho personas.¹⁵

En medio de tantos muertos y violencia, algunos sondeos que evidencian el grado de conocimiento y la calificación de algunos personajes, son interesantes:

>**Felipe Calderón**, 96% es su nivel de conocimiento; y 6.3 índice de opinión. (BGC, Beltrán y Asociados).

>**Andrés Manuel López Obrador**, 96% también, y 3.9

>**Beatriz Paredes**, 78% y 5.9

>**Enrique Peña Nieto**, 75% y 7.3; y

>**Marcelo Ebrard**, 72% y 5.7¹⁶

Una negociación inviable e indeseable.

Andrés Manuel López Obrador planteó el pasado 28 de septiembre, en el Zócalo capitalino, ante decenas de miles de seguidores suyos, la posibilidad de que ese movimiento ciudadano establezca acuerdos con el grupo en el poder, en el marco del Poder Legislativo, a condición de que el actual gobierno renuncie, “en cualquier modalidad”, a su empeño de privatizar la industria petrolera y otorgue su apoyo al Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de PEMEX, elaborado recientemente por un comité de intelectuales y expertos; se renueve a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y al Procurador General de la República, y se acepte el plan de rescate de la economía popular propuesto por él el pasado 15 de septiembre en esa misma plaza: cancelación de las alzas en el precio de los combustibles y electricidad; otorgamiento de becas a los estudiantes de preparatoria en todo el país; incremento al presupuesto de las universidades públicas; establecimiento de una pensión alimentaria de medio salario mínimo a todos los adultos mayores del territorio nacional; entrega de los ahorros de los ex braceros; aumento al presupuesto al agro, restablecimiento de los precios de garantía y subsidios al fertilizante; construcción de tres refinerías; cancelación de la llamada Alianza por la Calidad Educativa recientemente firmada por **Felipe Calderón** y **Elba Esther Gordillo**; inicio de un programa de construcción de obras públicas orientado a reactivar la economía y generar empleos.

Los fondos necesarios para la aplicación de este plan _400 mil millones de pesos_ pueden obtenerse, dijo el político tabasqueño, mediante un recorte de 200 mil millones de pesos en los

gastos suntuarios de la administración pública federal y la suma similar que se espera recibir este año por la diferencia entre los precios petroleros previstos en el presupuesto y las cotizaciones internacionales reales del crudo.¹⁷

Otra encuesta con respuestas interesantes a preguntas sesgadas.

> ¿Usted personalmente, tiene más miedo por lo que ha escuchado de la violencia de los narcos en los últimos meses, o no?

Sí, 51%; No, 43%.

> ¿Usted considera que fue una decisión correcta haber mantenido al Ejército en la lucha contra el narcotráfico aunque se violen algunos derechos de los ciudadanos; o cree que fue una mala decisión meter al Ejército porque ocasionó que se violaran ciertas garantías de la población?

Sí, 54%; No, 39%.

> ¿Usted piensa que el Presidente **Calderón** debe seguir la lucha contra el narco, como hasta ahora, sin importar los hechos violentos que haya; o cree que el Presidente debería pensar dos veces si seguir por ese camino o no, porque está resultando peor tanta violencia?

Sí, que siga, 55%, que lo piense, 40%.

> ¿Usted por qué cree que hay más violencia: porque están atacando al narco donde realmente les duele; o porque el Presidente y su equipo no saben cómo controlar a los narcos y el asunto se les está yendo de las manos?

Realmente están atacando al narcotráfico 38%. No han sabido cómo controlar a los narcotraficantes, 42%.¹⁸

El IFE “tranquilizando” a la población para las votaciones.

El consejero presidente del IFE, **Leonardo Valdés Zurita**, reconoció que el contexto de inseguridad que vive el país no es favorable para que se desarrolle, de manera pacífica y con amplia participación de la ciudadanía, el proceso electoral intermedio 2009.

“Estoy cierto que el contexto (inseguridad) en el que estamos viviendo no es nada favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico, de un

proceso con una alta participación de la ciudadanía”, señaló.

“No olvidemos que vamos a convocar a millones de ciudadanos, no solamente a votar, sino también a ser funcionarios de casilla, y que este clima de inseguridad pública que se está viviendo, puede ser un elemento que limite la respuesta de la ciudadanía”, añadió.¹⁹

Opiniones del presidente Felipe Calderón.

El Presidente **Felipe Calderón** reconoce que, en el combate al crimen organizado se carece de un sistema nacional de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión “largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso”.

Lo anterior, señala el mandatario, ha provocado circunstancias que se traducen en la “desorganización de las capacidades del Estado

para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal”.

Al sustentar su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enviada a la Cámara de Diputados, **Calderón** admite falta de coordinación y “lógica rivalidad” entre los cuerpos policiales. “Se llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen”, menciona.

En el documento que analizarán los diputados, el Presidente explica: “Esa dispersión orgánica implica duplicidad de funciones y dualidad de gasto, sin mencionar la pérdida gradual de la capacidad de garantizar un adecuado esquema de control de confianza, así como una total carencia de coordinación, congruencia y homogeneidad de protocolos, sistemas, formas de organización, grados y atribuciones”.

En el Senado, el PRI criticó la propuesta por ser una visión parcial y la consideró “muy perfectible”.²⁰

El problema es complejo pero tiene solución.

Como podemos apreciar, el problema de la inseguridad que estamos sufriendo en México con una evidente tendencia al incremento de su peligrosidad, no es un problema que se pueda resolver con tan sólo medidas policíacas, o con la introducción de una fuerza disuasiva y coercitiva mejor dotada como pudiera ser el Ejército, el diagnóstico no puede ser tan simplista y las soluciones tampoco.

En esta calamidad convergen problemas políticos derivados del proceso de transición, de un régimen autoritario y paternalista con altas dosis de corrupción e impunidad, hacia otro auténticamente democrático; con un desarrollo sostenible, en el marco de un Estado de Derecho, y orientado a la consecución del bien común de la nación en beneficio de todos y cada uno de los mexicanos y sus familias, con una especial atención a la mayoría que se encuentra en la pobreza, e incluso en la miseria, con una marginación que resulta totalmente incompatible con una sociedad justa, que pretenda vivir en paz.

El problema también es ético y moral. Estamos pagando las consecuencias de una educación que no es tal, sino que ha estado limitada a una instrucción ayuna de valores, con una cobertura muy significativa, pero que deja mucho que desear en cuanto a su calidad como ha sido plena y reiteradamente demostrado en las evaluaciones de carácter internacional que se han practicado a los maestros y a los alumnos.

Es un problema estructural que, tal como lo ha expresado el Presidente, necesita ajustes importantes para enfrentar una problemática que no sólo excede las capacidades de los Estados de la República, sino incluso las posibilidades de la acción federal, porque se trata de una calamidad de características globales que involucra ingentes intereses económicos, capaces de comprar armas, recursos y voluntades de todos los niveles para conformar verdaderos ejércitos transnacionales a su servicio.

La solución de este problema debe considerar todas esas facetas para darles respuesta. Para ello, tal como

lo ha expresado el Presidente **Felipe Calderón**, se requiere que el país esté unido en una verdadera campaña nacional en la que estén involucrados todos los sectores sociales y sus grupos mejor organizados, trabajadores, empresarios, profesionistas, maestros, académicos e intelectuales, iglesias, Medios de comunicación y desde luego, los tres Poderes de la Unión y los tres Órdenes de Gobierno, que deben incrementar su coordinación para lograr la eficacia y contundencia necesarias, urgidos todos por la convicción de que el país no tendría salida si no fuésemos capaces de enfrentar y resolver este problema que lesiona a innumerables familias mexicanas, sometiéndolas a una especie de moderna esclavitud y les afecta a tal grado que les dificulta, e incluso les impide, su desarrollo, arrebatándoles la tranquilidad y la armonía social a las que tienen derecho.

Pero también es pertinente indicar que los amasijos muy complejos se deben desintegrar parte por parte comenzando por lo básico, y en este sentido resulta elemental terminar, en forma radical, con la mescolanza perversa en la que muchos de los responsables del problema se encuentran inopinadamente formando parte de los cuerpos presuntamente destinados a su solución. Se ha reconocido la grave corrupción de muchas autoridades pero no se han tomado las medidas necesarias para remediarla y, si esto no se hace, la solución será inalcanzable. ¿Quién puede ir a la guerra con un ejército cuyas fuerzas, presuntamente de élite, de la AFI, se rebelan y denuncian a su creador y jefe máximo, el Secretario de Seguridad Pública, **Genaro García Luna**, por estar coludido con los delincuentes?

En Checoslovaquia, la transición fue acompañada de una depuración radical para eliminar los principales focos de corrupción política, ideológica y económica del régimen comunista. De hecho, fue promulgada una ley, de “lustración” en octubre de 1991, durante el gobierno de **Václav Havel**, que prohibía la participación de los anteriores colaboradores de la policía secreta comunista, de los principales funcionarios del partido, incluyendo a todos los miembros de su milicia armada, y de los egresados de las academias policíacas, que en esa forma fueron inhabilitados para intervenir en cargos de alta responsabilidad en el nuevo gobierno, por un periodo de cinco años, incluyendo en los cuerpos vedados a las nuevas policías, los órganos de inteligencia, las procuradurías, los ministerios económicos y el Banco Central, las principales empresas paraestatales, el Poder Judicial con la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas de rango de Coronel hacia arriba, la Presidencia del país y el gabinete, las direcciones de radio y televisión y los mayores puestos directivos en las universidades.²¹

Lo cierto también es que en México, en el análisis del grave problema de la violencia que padecemos, una evaluación, aún superficial _como la que puede derivar del sentido común del pueblo_ del desempeño de muchos de los actores responsables de los órganos de seguridad y justicia, en los tres Órdenes de Gobierno, les resulta muy desfavorable, y entonces, parece absurdo que los responsables de no haber impedido el agravamiento de esta situación tan delicada para el país, porque así les convenía, desde hace varios lustros, sean los mismos que actualmente estén encargados de instrumentar las necesarias y urgentes soluciones.

Pareciera oportuno recordar las palabras de **Václav Havel** quien, interrogado acerca de la razón por la cual estaba reemplazando a los altos mandatarios que había heredado, con gente nueva que carecía de antecedentes en el gobierno, la justicia y la policía, contestó: “Prefiero inexperiencia temporal a sabotaje permanente”.²²

Claves del documento

Exposición sintética del tema

- *Opiniones*
- Hechos
- **Actores**

Notas al final del documento

¹ Declaratoria conjunta de los Sectores Productivos y la STPS, Milenio, 12 de septiembre del 2008.

² Alejandro Junco de la Vega, septiembre del 2008.

³ Antonio Cerda Ardura, Siempre, 20 de septiembre del 2008.

⁴ Carlos Ramírez, Vértigo, 20 de septiembre del 2008.

⁵ De la Redacción, Excélsior, 20 de septiembre del 2008.

⁶ Pascal Beltrán del Río, Excélsior, 21 de septiembre del 2008.

⁷ Encuestas, Milenio, 22 de septiembre del 2008.

⁸ Desplegado del EPR, 22 de septiembre del 2008.

⁹ Lorena López, Milenio, 25 de septiembre del 2008.

¹⁰ Benito Jiménez y Luis Brito, Reforma, 25 de septiembre del 2008.

¹¹ Ignacio Alzaga y Francisco García, Milenio, 27 de septiembre del 2008.

¹² Juan Arvizu y Jorge Ramos, El Universal, 27 de septiembre del 2008.

¹³ Staff, Reforma, 28 de septiembre del 2008.

¹⁴ José Gerardo Mejía, El Universal, 29 de septiembre del 2008.

¹⁵ Redacción, El Universal, 29 de septiembre del 2008.

¹⁶ Encuestas, Excélsior, 29 de septiembre del 2008.

¹⁷ Editorial, La Jornada, 29 de septiembre del 2008.

¹⁸ Encuestas, Milenio, 21 de julio del 2008.

¹⁹ Susana Hernández, Milenio, 2 de octubre del 2008.

²⁰ Andrea Merlos, El Universal, 2 de octubre del 2008.

²¹ Fredo Arias King, *Transiciones. La Experiencia de Europa del Este*, página 28 (la ley de “lustración” es anterior a la separación pacífica, el 1º de enero de 1993, en dos países: República Checa y Eslovaquia).

²² Fredo Arias King, *Transiciones. La Experiencia de Europa del Este*, página 150